

La violencia política invade Venezuela

José Virtuoso

Entre los días 11 y 14 de abril, Venezuela sufrió una situación de golpe de estado y de recuperación del poder difícil de entender. Este golpe de estado no es sino un momento más de una larga historia de violencia, de marchas y contramarchas, en la que se haya sumergido el país y que tiene como antecedentes la Constitución de 1999 y las 49 leyes. Venezuela es hoy una sociedad polarizada en dos frentes antagónicos incapaces de dialogar entre sí y que necesitan urgentemente de un diálogo. ¿Cuáles son las condiciones y agenda de este diálogo?

Cuando el Presidente Chávez regresa al Palacio de Gobierno en la madrugada del pasado 14 de abril, después de un frustrado golpe de Estado y en medio de un gran vacío de poder, convoca de forma inmediata a un gran diálogo nacional para enfrentar la crisis y avanzar hacia la pacificación y la reconciliación del país. Creemos que la única alternativa que tiene el país es construir un amplio espacio de encuentro y negociación que haga posible trazar caminos factibles hacia la paz, la estabilidad, la democracia, la eficiencia económica y el bienestar social para las mayorías secularmente empobrecidas.

Las dificultades del diálogo

La iniciativa tomada por el Presidente de la República ha sido recibida con escepticismo y frialdad por parte de los portavoces de la oposición y por las opiniones expresadas en los medios de comunicación. Por parte de gobierno y de los sectores vinculados al mismo, la iniciativa es mirada con muchos recelos y dudas acerca de la real capacidad de entablar un diálogo verdadero en medio de una situación tan polarizada y llena de tensiones. Vamos a tratar de poner de relieve algunas de las principales dificultades para el diálogo que están en la escena.

Una sociedad polarizada en dos frentes políticos antagónicos

Existen en la actualidad dos minorías que ocupan el escenario político. Insistimos en su carácter de minorías porque no representan orgánicamente a la gran mayoría del electorado nacional, aunque evidentemente hay puntos de conexión con sensibilidades mayoritariamente sentidas. Estas minorías están caracterizadas por sus posiciones radicalizadas y definitivamente antagónicas dentro del espectro político y dispuestas a resolver las diferencias mediante la violencia y pres-

cindiendo, si es necesario, de la institucionalidad constitucional y legal vigente.

Esas minorías son anómicas, es decir, no responden a una doctrina política, a una línea de mando, a una estrategia de acción y a una identidad y disciplina organizativa. Los sucesos del 11 al 14 de abril permiten que aventuremos la hipótesis de que se trata más bien de conjuntos heterogéneos de grupos y personas, con intereses propios y distintos, que en determinadas circunstancias se agregan en función de objetivos pragmáticos, pero que con la misma facilidad se disuelven o contraponen.

Los sucesos del 12 de abril permiten aseverar esta afirmación. La minoría antigobierno pone en marcha varias conspiraciones al mismo tiempo que terminan en un golpe de Estado capitalizado por un pequeño grupo que sucumbe en la más absoluta soledad. Esto demuestra la variedad de intereses y personas interactuando en una red muy confusa de relaciones y lealtades. La otra minoría, la del «chavismo,» también ha demostrado ser un conjunto muy heterogéneo, compuesto de varios líderes y portavoces, con posiciones ideológicas a veces contrapuestas, con méto-

dos de lucha también variados y no siempre en sintonía, que sin embargo tuvo el éxito de articularse para apoyar la vuelta del Presidente Chávez.

Sin embargo, su carácter de minorías no significa que no tengan capacidad de convocatoria a determinadas mayorías en algunos momentos, tal y como ocurrió el 11 de abril con la multitudinaria marcha hacia el Palacio de Gobierno, para pedir la renuncia del Presidente Chávez, o como sucedió en la convocatoria popular el 13 de abril para pedir la restitución del Presidente Chávez.

La política con los medios de comunicación manejada desde el antigobierno o desde el chavismo ha permitido permear y llegar a las sensibilidades de las mayorías y provocar su apoyo o rechazo de acuerdo a las circunstancias. Este juego de los medios ha creado una dinámica perversa mediante la cual la opinión pública se conforma a merced de los insumos que estas minorías proyectan en el escenario nacional. Aquí hay que decir que la política de comunicación tanto del gobierno como de los medios privados de comunicación ha sido cuando menos irresponsable, porque cada uno, valiéndose de su posición en la comunicación, ha hecho ver la situación

nacional desde el prisma de intereses y posiciones parciales y minoritarios. De esa manera nos sólo no han contribuido a la mediación sino que han fomentado el posicionamiento de una perspectiva.

*aunque la autonomía de la
política exterior es una
reivindicación fundamental
de cualquier estado,
también lo es el cuidado de
las alianzas comerciales*

Desde el último trimestre del año 2001, se incrementó la lógica de la confrontación por reacción entre estos sectores, la lógica política, se sustituyó por la lógica de la guerra, en donde se busca aniquilar al enemigo.

Conviene recordar brevemente este proceso. La aprobación en noviembre de 2001 de 49 leyes por parte del Ejecutivo Nacional, mediante el recurso de la «Ley Habilitante», trajo como consecuencia directa la oposición radical de diversos sectores de la sociedad que no se sintieron debidamente consultados o sintieron que algunos de sus intereses se afectaban directamente.

El gobierno no aprovechó la oportunidad para propiciar un debate

público con todos los sectores involucrados sobre las orientaciones, metas y objetivos de aquellas leyes, lo que probablemente hubiera reducido la magnitud de los conflictos a posteriori y aumentado la calidad de las mismas leyes.

Esta situación interna coincidió con un endurecimiento del contexto internacional a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Las declaraciones de representantes del Ejecutivo, incluido el propio presidente, carecieron del tacto necesario en un momento de extrema sensibilidad por parte de las fuerzas dominantes en el mundo. Aunque la autonomía de la política exterior frente a estas fuerzas es una reivindicación fundamental de cualquier estado que, como el nuestro, tenga la autodeterminación como principio constitucional, también lo es el cuidado de las alianzas comerciales de las cuales Venezuela obtiene sus principales ingresos.

Conviene también recordar que el conflicto no resuelto en la elección de la directiva de la CTV (Central de Trabajadores de Venezuela), puso de manifiesto otro antecedente pendiente y que causó mucho malestar la designación no sujeta a mecanismos constitucio-

nales, bajo el pretexto de la provisionalidad, de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo y del cuerpo de magistrados del Tribunal Supremo. Con lo cual, los grandes conflictos sociales, en este caso nada menos que la elección de la directiva de la principal central obrera del país, no encontró medios debidamente legitimados para resolverse adecuadamente.

En medio de esas torpezas, hasta principios del mes de abril, las fuerzas de la oposición de todo signo, respaldadas por los principales medios de comunicación, fueron ampliando sus espacios de acción y movilización. El 10 de diciembre organizaron un paro cívico nacional, el 23 de enero protagonizaron una concurrenada marcha en defensa de «la democracia y la libertad» consideradas amenazadas por este gobierno, el 4 de febrero convocaron a una jornada de luto, el 27 de febrero la CTV, en compañía de Fedecámaras (Federación Nacional de Empresarios) y otros sectores de la oposición, organizaron otra marcha en conmemoración de un nuevo aniversario de los sucesos del 27 de febrero de 1989 (El Caracazo).

También hemos presenciado cacerolazos, apagones de luz, concen-

traciones en la Plaza Francia de Altamira, al este de Caracas, y manifestaciones frente a la residencia presidencial. Estas reacciones fueron reseñadas por los medios cuando menos en forma sesgada, creando una matriz de opinión según la cual la gran mayoría de la sociedad civil venezolana estaba en las calles pidiendo la salida del gobierno del presidente Chávez.

En respuesta a las movilizaciones de la oposición antigobierno, los sectores que apoyan al gobierno también habían desplegado una

*de manera irresponsable,
los organizadores de la
marcha opositora
propiciaron una
confrontación que no podía
sino terminar en hechos de
violencia*

intensa actividad de calle. A la manifestación convocada por la oposición el 23 de enero, respondieron con una también multitudinaria marcha el mismo día y el 4 de febrero realizaron otra mayor aún. El 27 de febrero también hubo una contramarcha que recorrió la ciudad de Caracas de este a oeste y culminó en un mitin con la presencia del presidente.

Este clima de polarización creciente condujo a los deplorables acontecimientos de principios de abril. Sobre la base del conflicto de la gerencia de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), con el gobierno nacional, la CTV y Fedecámaras convocaron inicialmente un paro nacional de 24 horas el día 9, para extenderlo luego por 24 horas adicionales y finalmente transformarlo en una huelga general. Durante el tercer día de paro, las fuerzas de la oposición llevaron a cabo una multitudinaria manifestación cuyo destino inicial estaba programado que fuese la sede de la empresa petrolera estatal PDVSA en Chuao, (en el este de la ciudad de Caracas).

Al alcanzar este punto, afianzados por lo numeroso de la movilización, los organizadores decidieron continuar con su acción de protesta y conducir la marcha hasta el palacio presidencial de Miraflores en el centro de la ciudad. Mientras esta movilización se desarrollaba, alrededor del palacio presidencial se habían venido congregando miles de personas para expresar sus simpatías por el presidente Chávez.

En esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido con las dos marchas del 23 de enero, no se tuvo la

precaución de mantener separados las manifestaciones opositoras y partidarias al gobierno. Por el contrario, de manera irresponsable por decir lo menos, los organizadores de la marcha opositora propiciaron una confrontación que no podía sino terminar en hechos de violencia. Los resultados de esa violencia enlutan hoy a Venezuela. Más de una decena de venezolanos fallecidos y más de un centenar de heridos ha sido un costo excesivamente elevado a pagar por la polarización política que vive el país.

*la superación de la pobreza
es un problema de todos
porque todos podemos salir
beneficiados en una sociedad
en donde el bienestar
material cubre a la mayoría
de la población*

La dispersión y la anomia en el interior de cada minoría polarizada se han profundizado. El sector antigobierno cuenta ahora con varias voces, organizaciones representativas, más recelos de uno frente a otros. Algunos de los convocados se sienten frustrados, otros engañados y otros siguen en pie de guerra. Por parte, del chavismo, se han ido abriendo mu-

chos frentes desde los más moderados hasta los más radicales. Incluso hay sectores atravesados por la polarización: la Fuerza Armada, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil. Especialmente importante es el caso de la Fuerza Armada, la confrontación política la invadió abiertamente y según el General Lucas Rincón, Inspector General de la institución castrense, existe una evidente fractura interna y claros signos de indisciplina interna.

Mientras tanto, el rumor general en la calle es que la división es tan grande y las posiciones tan irreductibles, que es imposible no pensar que nuevamente los bandos están organizando la conspiración y la contraofensiva según el caso.

El no reconocimiento de las aspiraciones populares

Se ha dicho hasta la saciedad que el discurso chavista dividió la sociedad en clases antagónicas y convirtió la convivencia ciudadana en un escenario de odios de pobres contra ricos provocando la reacción contraria. Oligarcas contra revolucionarios, el pueblo contra la sociedad civil del este de Caracas, etc. Ciertamente que esta

violencia discursiva y retórica le ha hecho un flaco favor a los pobres del país y a los procesos de organización, cogestión y participación popular que requieren un clima social de cooperación y de inclusión social. La superación de la pobreza es un problema de todos porque todos podemos salir beneficiados en una sociedad en donde el bienestar material cubre a la mayoría de la población. Esa es la experiencia de las sociedades desarrolladas.

Sin embargo, es una miopía total no ver en el presidente Chávez, aquel en quien los sectores populares se sienten reconocidos, expresados y convocados al protagonismo político. Chávez no es una suerte de nuevo Carlos Andrés Pérez, que gracias a sus promesas populistas y a su perfil mesiánico, arrastra tras de sí las masas con la expectativa de compartir el reparto de la riqueza del Estado. En los discursos de Chávez pueden encontrarse sin lugar a dudas estos rasgos. Sin embargo, su popularidad y arraigo tiene fundamentalmente ese matiz. Chávez con su discurso, su propuesta de Constitución, de revolución, convoca fundamentalmente al protagonismo popular, a la reivindicación política, al reconocimiento como pueblo, de su palabra, de sus ex-

presiones y sus deseos. No reconocer esta dinámica es no reconocer lo que movió a las mayorías populares del país a rechazar con todas sus fuerzas el grotesco espectáculo excluyente del viernes 12 de abril, en el cual a lo más que se llegó a decir era que la «política del nuevo gobierno contendría ciertamente una clara dimensión social» y a respaldar y a festejar la vuelta de Chávez a Miraflores como Presidente.

Excluir a Chávez es excluir a la gran mayoría popular que se siente reivindicada en su discurso, y que lo ha elegido y reconfirmado en el poder. Excluir a Chávez es negar a los otros y en consecuencia adoptar una posición que sólo conduce a la violencia.

De cómo es posible el diálogo

Desde lo planteado anteriormente, es necesario afirmar, sin riesgo de exageración, que la sociedad venezolana está ante el dilema de diálogo-entendimiento y concertación o guerra civil y anarquía generalizada. Exorcizar los demonios de la violencia y la exclusión debería ser la tarea inmediata y urgente de todos los sectores relevantes de la vida nacional. En este sentido conviene poner en claro las condiciones fundamenta-

les para el diálogo en una sociedad caracterizada por la división y la exclusión.

El primer ingrediente para el diálogo es el reconocimiento de la Constitución de 1999 y de la institucionalidad propuesta para resolver las diferencias y buscar objetivos comunes. En este marco se impone el reconocimiento a su vez de Hugo Chávez como Presidente de la República, elegido y reelegido por mayoría de votos. Y, aunque ha cometido errores fundamentales en la conducción política, cosa que él mismo está reconociendo públicamente, sin embargo, ninguno de ellos justifica su deposición mediante la violencia.

En segundo lugar, es necesario que la Fuerza Armada se retire a sus cuarteles y obligaciones profesionales y restrinja su participación política a los mínimos necesarios y establecidos, sin prestar oídos a todas aquellas voces que invitan a la institución a salirse de su marco de actuación para intervenir en el conflicto político. Sólo así puede salir del fraccionamiento en el que se encuentra y reencontrar su posición institucional en la sociedad venezolana. Igualmente, se impone el desarme de todos aquellos grupos y personas que han asumido la defensiva

o conspiración armada. Esa dinámica construye un círculo vicioso de acción y reacción que funciona

*el diálogo sólo será posible
si las minorías polarizadas
se convierten en fuerzas
políticas homogéneas*

casi automáticamente y que conlleva a lógica cerrada de la guerra. Hay que sacar a las armas del conflicto, provengan de provengan, para que la palabra sea quien pueda protagonizar el debate y prive así la lógica de la política, entendida desde el horizonte que plantea la democracia.

El tercer ingrediente para lograr éxito en el diálogo, es que el Presidente Chávez se siga convenciendo así mismo y al resto del país, mediante señales creíbles de rectificación, de la necesidad de reorientar su estilo de gobierno sobre la base del diálogo, del reconocimiento de las diferencias, de la tolerancia y sobre todo del respeto y acatamiento de la institucionalidad establecida en la Constitución de 1999. El mantenimiento de la legitimidad de esa constitución fue su salvación y la del país y lo seguirá siendo en la medida en que su programa sea el norte que oriente la acción política tanto del gobierno como del Estado.

Es obligación del Presidente imponer esta perspectiva a todo el conjunto de funcionarios que integran el ejecutivo nacional y al mismo tiempo a todo el conjunto de sus aliados que operan en otras instancias del Estado, así como también a las fuerzas políticas que lo apoyan.

El cuarto ingrediente es que el diálogo sólo será posible si las minorías polarizadas se convierten en fuerzas políticas homogéneas, saliendo de su anomia y dispersión y se conectan orgánicamente con las mayorías. La minoría antigobierno debe organizarse como oposición organizada y la minoría chavista debe convertirse en fuerza política con un juego claro, abierto a todos, enmarcado dentro del orden institucional. Esas transformaciones son imprescindibles si se quiere hacer un diálogo responsable.

El quinto ingrediente es jugar a la inclusión de los sectores populares en el juego político, inclusión que supone su reconocimiento como actores políticos que exigen ser escuchados desde sus exigencias de marginación secular, desde sus culturas y tradiciones. Si los pobres y sus intereses son excluidos jamás obtendremos la tan ansiada paz social y el camino que nos lleve al entendimiento fructífero.

La agenda del diálogo

El primer problema que la sociedad tiene que resolver y sacar a la luz es la verdad de lo acontecido durante los días 11 al 14 de abril. Especialmente en lo referente a las muertes acaecidas. Sólo la justicia y la verdad nos reconciliaran y permitirán que los sectores en disputa entren en una dinámica real de entendimiento.

Especialmente el gobierno se juega su legitimidad y su credibilidad. Hay señales alentadoras en la dirección de hacer operativa por varios caminos una investigación real de lo acontecido para esclarecer los hechos. Prueba de ello es el debate en la Asamblea Nacional, los pasos dados por los cuerpos de investigación policial, la Fiscalía, etc.

Preocupa que la designación de una COMISION DE LA VERDAD, aunque constituida por independientes, proceda de una resolución de la Asamblea y no de una ley especial que la dote de sus funciones, autonomía y capacidad propia.

El Presidente por su parte, ha constituido mediante decreto una «Comisión coordinadora del diálogo nacional». Su función es presentar a la mayor brevedad posible

una serie de proposiciones concretas que expresen el consenso nacional sobre aquellos puntos prioritarios de interés nacional que requieran rápida y oportuna respuesta. La eficiencia de esta comisión radica en buena parte en su composición plural y en su capacidad de recoger y agregar los intereses de la mayoría nacional.

Hay tres grandes temas que no pueden faltar en la agenda del diálogo nacional.

Temas para el dialogo

El **primer tema** consiste en diseñar un plan mínimo para estimular la inversión y el empleo. Las cifras de desempleo y empleo en la economía informal de supervivencia dejan claramente en evidencia esta prioridad. Esas altas cifras indican las causas inmediatas del empobrecimiento generalizado sustentado en la crisis de ingreso de las familias venezolanas.

Un plan verdadero y real de empleo requiere conjugarlo con el tema de la inversión de capitales, confianza y condiciones macroeconómicas. Es decir, con el tema de los empleadores y la estructura de empleo. Supone una visión estructural de la economía y un plan orgánico sobre ella.

Por otra parte, se requiere que el tema económico sea tomado desde sus ángulos más sentidos por los actores más directamente involucrados: desde el capital y desde el trabajo. No hay que olvidar que estos sectores fueron los desencadenantes de la crisis política. También hay que tener en cuenta que, aunque son temas directamente vinculados, muchos aspectos concretos entran necesariamente en conflicto, por lo cual se requiere un tratamiento conjunto.

El **segundo tema** debe ser el fortalecimiento institucional para la inversión social en educación, salud, hábitat, subsidio al consumo básico. Los análisis en materia de política social coinciden en afirmar que una política realista de empleo en función de la productividad y la generación de riqueza requiere un esfuerzo sostenido del Estado en inversión de capital social en las áreas prioritarias antes enunciadas.

En función de ello se requiere una política social lo más institucionalizada posible, fuera de toda ingerencia partidista, clientelar, orientada desde los grandes principios establecidos en la constitución (en materia de derechos sociales) pero hecha operativa desde criterios técnicos y gerenciales modernos.

Hay tres ingredientes básicos: política social clara, institucionalidad eficiente al servicio de ella y recursos (y bien valdría la pena que el Estado se endeudara en función de esta inversión interna). El gran peligro es, dada la urgencia, de crear operativos tipo Plan Bolívar, etc. Hay además en esta materia un verdadero capital social de instituciones, acervo teórico, experiencia, etc. que pueden efectivamente coadyuvar a favor de una rápida respuesta.

El tercer tema que no puede faltar en la agenda es el de la Gobernabilidad democrática para el cambio. Habría que enfocar este tema desde los contextos de democracia y cambio que son los escenarios en donde se inscribe la crisis política que atravesamos. La gobernabilidad que hay que recuperar se refiere a los mecanismos legítimos de gobierno para conducir al país hacia la profundización democrática que propone la constitución de 1999, el reconocimiento de las aspiraciones de las mayorías empobrecidas del país, expectativas que no son sólo expectativas de «superación de la pobreza», sino que apuntan hacia una participación efectiva y protagónica en la toma de decisiones. Esos mecanismos suponen estilos y modos

de gobernar y sobre todo medios para la resolución de conflictos.

En esa perspectiva habría que plantearse el fortalecimiento de la legitimidad de los canales de resolución de conflictos sociales. Para lo cual es imprescindible comprometer a la Asamblea Nacional en un cronograma de trabajo que permita en breve tiempo cumplir con la Agenda legislativa constitucional pendiente para con el Ministerio Público, la Defensoría del pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Federal y el Consejo Nacional Electoral. Seguidamente es necesario proceder a la integración de las autoridades de estos cuerpos de acuerdo a lo pautado en la ley.

Del mismo modo es necesario acordar en el marco pautado por la constitución de 1999 acuerdos con las instituciones fundamentales de la vida política nacional acerca del modo de su intervención en los procesos políticos y recoger aprendizajes. Esto supone el diálogo directo del Presidente de la República para con la fuerza armada nacional, los medios privados de comunicación social, los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil. ■